



SUPLEMENTO DE
ANÁLISIS POLÍTICO





Foto: Cortesía

La unidad opositora en Nicaragua: ¿una quimera alcanzable?

Suplemento de análisis político - Edición 163

La unidad de la oposición es uno de los temas más llevados y traídos en los medios de comunicación y las redes sociales, y uno de los que causa más frustración a muchas personas incluso desde antes de 2018. Se adelantan toda clase de hipótesis sobre la incapacidad de la oposición de unirse contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo y se argumentan desde los egos en competencia, el afán protagonístico, los ataques viscerales de unos contra otros, la ideologización de la lucha y otras más. No hay duda de que de todo eso existe pero no son las razones de fondo. En esta edición de Perspectivas, se exploran algunas explicaciones considerando que la demanda se mantiene entre la ciudadanía y la comunidad internacional.

La división de los sublevados

Desde el 2018 hasta mediados del 2021, la oposición y el movimiento cívico se agruparon

alrededor de dos grandes plataformas: la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y la Unidad Nacional Azul y Blanco. En 2020 e inicios de 2021, se intentó la conformación de dos alianzas electorales: la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana. Pero a raíz de mayo de ese año, la brutal represión de la dictadura descabezó y fragmentó a la oposición democrática. La fragmentación es un estado anterior a la división y superarla es el primer paso para construir una unidad en la lucha contra el régimen Ortega-Murillo.

En abril de 2018, decenas de miles de personas que hasta entonces habían permanecido inactivas o excluidas del proceso político, surgieron como la lava de un volcán trastocando los planes de consolidación dinástica del régimen orteguista y forzando la ruptura de sus alianzas, principalmente la que mantenía con los grandes empresarios privados representados por el Consejo Superior de la Empresa Privada

(COSEP). Esta sublevación no tuvo conducción estratégica, plan, organización o liderazgo. Fue espontánea.

Centenares de pequeñas agrupaciones autoconvocadas surgieron al calor de las grandes movilizaciones populares y se sumaron otros grupos y organizaciones que ya tenían una trayectoria de lucha como las feministas, ambientalistas, organizaciones estudiantiles, muchas de ellas buscando hacerse escuchar y representar directamente. Sus acciones se coordinaban horizontalmente, principalmente a través de las redes sociales.

La enorme diversidad del movimiento y su carácter autoconvocado impidió a la dictadura identificar una cabeza a la que golpear o sobornar, como había hecho anteriormente con las protestas sociales que surgieron antes del 2018, y esa fue una de las grandes fortalezas de la lucha opositora. Esta diversidad y horizontalidad produjeron iniciativas y modalidades de lucha muy ricas que pasaron a ser parte del acervo político de participación ciudadana. Muchas de ellas no tenían precedente en la historia del país.

Pero este aspecto de la fortaleza del movimiento azul y blanco era también su principal debilidad.

La dictadura era una en su accionar, con una estrategia coherente y fuerzas disciplinadas, mientras que del lado de la oposición había dispersión, disenso y poca coordinación. Las permanentes disputas, los ataques entre miembros de la oposición, las dudas y las desconfianzas, y la baja capacidad para articular una estrategia compartida fueron la tónica que se mantuvo constante durante la insurrección cívica. Las juventudes, que jugaron un papel preponderante incorporaron elementos que entremezclaban rasgos de la vieja cultura política como el individualismo y las tensiones con las generaciones anteriores con el uso extensivo de las redes sociales, volviendo más compleja la dinámica opositora.

Esta carencia de organización y de interlocutores con algún grado de reconocimiento autoridad fue el resultado de la acción sistemática de la dictadura que durante años descabezó movimientos sociales, proscribió partidos, corrompió líderes y organizaciones políticas, y desarrolló campañas de desprestigio y estigmatización contra cualquiera que representara una amenaza para su control del poder. A esto se sumó la historia de caudillismo.



Foto: Cortesía

Lo que llamábamos oposición era una miríada de grupos y personas de distinto tipo, experiencia, visiones y características que coincidían en el objetivo de sacar a Ortega por medios pacíficos pero poco más. La oposición, más que dividida, estaba sumamente fragmentada. Esta situación cambiaría con el surgimiento y consolidación de dos agrupaciones nacidas de la sublevación cívica: la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).

Los esfuerzos que se realizaron a lo largo del 2019 para concertar una alianza estratégica entre ambos grupos fracasaron. Una causa importante fue la oposición del COSEP, los grandes empresarios y sus aliados que controlaban la ACJD; llenos de prejuicios y carentes de un compromiso democrático verdadero se opusieron a la unidad con la UNAB y priorizaron su control político sobre la interlocución con el régimen. Una alianza estratégica con la UNAB implicaba ceder espacios en la toma de decisiones y perder el control hegemónico que tenían por eso se opusieron a ello sistemáticamente.

La UNAB por su parte, tenía dentro de sus filas personas y grupos muy hostiles a la ACJD que eran muy activos en las redes sociales generando opinión pública aunque eran minoritarios. Los pronunciamientos y ataques de estos grupos sirvieron para que los representantes del gran capital dentro de la ACJD justificaran las desconfianzas y las posiciones anti unitarias. En otro sentido, la UNAB estaba en proceso de construir una institucionalidad democrática mínima que permitiera la toma de decisiones legítimas y aceptadas por la extraordinaria diversidad de actores que la conformaban. Este proceso, como es natural, se desarrolló inicialmente en un ambiente conflictivo en el que diversas ideas, estrategias y visiones sobre su identidad se confrontaban abiertamente. El estridente debate creó confusión y alimentó la idea de que era una organización errática, sin un rumbo claro, y por lo tanto, poco confiable.

El derrotero que siguieron la ACJD y la UNAB patentizó la división de las fuerzas opositoras de abril, sus dificultades para unirse y constituir un eje para la transformación del sistema político un modelo más inclusivo y democrático; también



Foto: Cortesía



Foto: Cortesía



Foto: Cortesía

perdieron la oportunidad de establecer un diálogo ventajoso con los partidos políticos legales que les permitiera entrar como una fuerza hegemónica a la coyuntura electoral.

La competencia electoral: Alianza Ciudadana y Coalición Nacional

A inicios del 2020 la proximidad de las elecciones comenzó a gravitar sobre la coyuntura política. Los partidos políticos buscaron como atraer a las fuerzas emergentes de abril, mientras la ACJD y la UNAB buscaban un vehículo legal

para participar en las elecciones. En este contexto, la ACJD que no había querido formalizar una alianza con la UNAB, promovió aceleradamente la formación de la Coalición Nacional en la que convergieron partidos políticos tradicionales, incluyendo al Partido Liberal Constitucionalista (PLC), junto a otras organizaciones políticas.

Por un momento se pensó que la Coalición podría unificar a toda la oposición pero esa expectativa se desvaneció con rapidez cuando pocas semanas después de haber promovido su formación, la ACJD abandonó la Coalición y pasó a conformar una alianza política con el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) llamada Alianza Ciudadana, dando lugar al surgimiento de dos bloques que se disputaban la representación de la oposición democrática y se preparaban para competir en las elecciones. Por su parte el PLC fue suspendido a raíz de que su presidenta pactara con el régimen y regresara a las filas del zancudismo. Estos dos bloques configurados como alianzas con propósitos electorales no tuvieron la capacidad, ni el tiempo, para ponerse de acuerdo y conformar un frente amplio, inclusivo, que estructurara una sola lista de candidatos, y enfrentara al régimen como una fuerza política y electoral unificada.

Las estrategias electorales se colocaron como prioridades y los bloques opositores aparecían como competidores. Pero además, influyeron factores como la desconfianza entre varios de los actores políticos democráticos, la ideologización que dividió a los opositores entre izquierda y derecha, el hecho de que la coyuntura electoral puso en primer plano a los partidos políticos con personería que tomaron el protagonismo por encima de las fuerzas emergentes de abril. Al final, la competencia entre los dos bloques opositores se resolvió con el golpe represivo de la dictadura que los colocó a ambos al margen del proceso electoral y los proscribió de todos los espacios políticos.

La represión como factor de fragmentación

Ahora es más claro que desde fines del 2020 el régimen de los Ortega-Murillo optó por radicalizar el estado policial y liquidar cualquier proceso electoral que le presente a la oposición la oportunidad de reanimar la movilización popular. Ortega decidió no exponerse a unas elecciones, por amañadas que fueran y optó por convertirlas en una absoluta farsa. Desde la oposición nadie esperaba que las elecciones cumplieran los estándares internacionales y muy pocos creían que los votos se contarían correctamente, pero no previeron, sino hasta el último momento, el alcance y la profundidad de la represión que desató Ortega. El allanamiento de la casa de Cristiana Chamorro el 2 de junio del 2021 y la imposición del arresto domiciliario fue el primer acto de una brutal oleada represiva que llevó a prisión a líderes políticos y de movimientos sociales, periodistas, empresarios, activistas, defensores de derechos humanos y otras personas.

Varios partidos políticos fueron ilegalizados, la presidenta de CxL fue forzada a exiliarse,

mientras al menos dos miembros de su directiva nacional fueron encarcelados. El recrudecimiento del acoso a activistas en todo el país y la liquidación de más de 500 asociaciones civiles entre 2021 y la primera mitad del 2022, han acompañado a los encarcelamientos, utilizando para ello un conjunto de leyes restrictivas aprobadas por el legislativo bajo el control de Ortega.

El brutal golpe represivo de la dictadura tuvo un efecto devastador sobre las organizaciones opositoras, tal como estaba previsto. Las principales organizaciones opositoras en el país se debilitaron y desorganizaron como resultado de las capturas y el exilio de centenares de líderes y activistas locales, el activismo en redes sociales descendió significativamente, y la parálisis impuesta por el miedo y el control forzaron un congelamiento de la acción política pública. En el interior del país se produjo un vacío y un silencio repentinos, mientras que la actividad comunicacional y política pasó a concentrarse casi exclusivamente desde el exterior.

El régimen renunció a la política, entendida como el arte de construir alianzas y generar



Foto: Cortesía

apoyo ciudadano como fuente de legitimidad y sostenibilidad del sistema, para convertirse en un Estado policial que utiliza la violencia y el terror sistemáticos como mecanismo para perpetuarse en el poder, además de cerrar hasta el último resquicio de disidencia política.

La UNAB y la ACJD, las organizaciones más reconocidas que surgieron de abril enfrentaron el retiro de algunas agrupaciones de sus filas, mientras tanto CxL despojado de su personalidad jurídica parece inmovilizado. Las estrategias que hasta el año pasado daban sentido a la actividad opositora y que tuvieron como foco el proceso electoral, ya no son útiles y aun no se perfilan otras nuevas. A eso hay que agregar que el reflujo del movimiento azul y blanco y la falta de un desenlace favorable a la democratización del país en un plazo previsible, han provocado desconcierto y desencanto entre un buen grupo de activistas y dirigentes que sobrevivieron la ola represiva. El resultado ha sido una oposición fragmentada en diversos grupos, dentro y fuera del país, que vive un momento de confusión, busca la unidad, pero no encuentra todavía los caminos para lograrla.

En busca de la elusiva unidad

En medio de la dispersión ningún grupo, o grupos, tiene el peso suficiente para actuar como un polo de atracción y convertirse en promotor efectivo de una creciente articulación entre las fuerzas que luchan por la democracia. Las visiones, las sensibilidades, la experiencia política, las personalidades, y las desconfianzas todavía influyen como separadores y no abonan a superar la fragmentación actual. De ahí que uno de los primeros pasos podría ser la constitución de pequeñas unidades para pasar después a una unidad mayor.

Ese camino no está del todo garantizado y tiene obstáculos reales que enfrentar; además, los



Foto: Cortesía

tiempos no son los mismos que las expectativas o urgencias ciudadanas por lo que es necesario avanzar con pasos seguros aunque a veces lentos. La unidad no puede decretarse. Sólo puede construirse en un proceso gradual de diálogos sucesivos que conduzcan al establecimiento de acuerdos y la generación de confianza entre las partes. Es un proceso lento y complejo pues arranca con grupos dispares y variadas expectativas sobre el papel de cada uno en esa elusiva unidad.

La unidad posible también es aquella que respete las identidades e intereses de los distintos grupos que la conformen en tanto éstos representan, de una forma u otra, la gran diversidad de la sociedad nicaragüense. A la vez, las legítimas agendas particulares no deberían constituirse en obstáculos para conseguir el gran objetivo. Pretender que las identidades se disuelvan y fusionen en una gran identidad unitaria es un error. Un papel sustantivo lo juegan los grupos organizados en el interior del país, pues les corresponde ser protagonistas de cualquier proceso unitario; de manera que los esfuerzos en esa dirección deberían ponerlos en el centro de las expectativas. Los grupos que desde el exterior promueven la unidad están obligados a construirla junto con las redes internas, ya sean territoriales o sectoriales.

Adicionalmente, la unidad no es el punto de llegada sino el punto de partida para plantarle la cara al régimen de los Ortega-Murillo y estar mejor preparados para el día en que se abra la transición política. Por eso es importante tener en cuenta que la salida del régimen es el objetivo mínimo a perseguir por las fuerzas democráticas, mientras el propósito estratégico debe ser asentar las bases para el establecimiento de la democracia en país. Este objetivo exige que las luchas hegemónicas entre los grupos que hoy forman parte de la oposición se pospongan hasta alcanzarlo.

Las tareas inmediatas e impostergables una vez que Ortega salga del poder implica que las



Foto: Cortesía

fuerzas prodemocracia tendrán que recuperar las instituciones públicas, garantizar justicia, verdad y no repetición a las víctimas y a toda la sociedad nicaragüense; tareas complejas y nada fáciles que tendrán que empujarse en medio de la resistencia de los reductos del orteguismo. Ese proceso también va a requerir de una firme voluntad y unidad de las fuerzas democráticas.

El desafío de la unidad es grande y complejo pero alcanzable para las fuerzas democráticas de Nicaragua. No hay recetas para definir exactamente cómo ni cuándo se alcanzará, pero si es indispensable construirla ya. Ese es el más grande de los retos de las fuerzas democráticas en la actualidad.



Foto: Cortesía

Centroamérica en la Cumbre

Entre el 6 y el 10 de junio se llevó a cabo la IX Cumbre de las Américas, que tuvo como anfitrión a Estados Unidos. Estaba prevista como un gran encuentro entre los mandatarios y distintos actores políticos del hemisferio para abordar asuntos de interés común. Pero las cosas no sucedieron tal como se esperaba.

Desde antes, se generó una gran expectativa y controversia por la decisión del gobierno estadounidense de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Esto dio lugar a opiniones encontradas entre diferentes mandatarios del hemisferio. Por ejemplo, Argentina, Bolivia, México y Chile se pronunciaron en distintos tonos contra de lo que consideraron una “exclusión” y dio lugar a que varios mandatarios no asistieran al encuentro, especialmente después que el mandatario mexicano efectuó una gira por diferentes países latinoamericanos para conseguir respaldo a su posición. Otros mandatarios latinoamericanos y del Caribe decidieron no acudir aduciendo otras razones, de manera que al final, la Cumbre se vio opacada por las ausencias del alto nivel.

De los mandatarios centroamericanos, solamente el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, acudió; los demás se ausentaron. Xiomara Castro, de Honduras, anunció que no asistiría si no se invitaba a todos los gobiernos por igual; Nayib Bukele, de El Salvador, no dio razones específicas, pero es evidente que su ausencia se debió a las tensiones que tiene con Estados Unidos desde hace algún tiempo, y Alejandro Giammattei, de Guatemala, adujo compromisos previos.

Lo cierto es que estas ausencias revelaron las tensiones existentes entre Estados Unidos y los países de la región a pesar que en el transcurso de la Cumbre, la vicepresidenta Kamala Harris anunció un fondo de 1900 millones de dólares para los países del norte de Centroamérica a fin de frenar los intensos flujos migratorios que se han desencadenado especialmente en el último año.

Uno de los temas centrales de la Cumbre fue el de las migraciones, además de aspectos como la inseguridad alimentaria, la crisis climática, los asuntos económicos y de salud. Los actores de sociedad civil presentes jugaron un papel beligerante en el abordaje de estas temáticas, pero no lograron sustituir la importancia de la ausencia de los mandatarios.

La Cumbre fue el reflejo de las diferencias de posicionamientos que existen en el hemisferio en relación a las problemáticas más importantes como el rumbo de las democracias, los flujos migratorios hacia Estados Unidos y la relación con este último país. Estas diferencias se han expresado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y es muy probable que se acentúen en los próximos meses. En el caso de Centroamérica, revelan un distanciamiento claro de Estados Unidos aun cuando los países de la región dependen de la cooperación y los vínculos comerciales con este país.

Centroamérica en la IX Cumbre de las Américas

Celebrada entre el 6 y el 10 de junio de 2022

EE.UU. no invitó a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Argentina, Bolivia, México y Chile se pronunciaron en contra.

Provocó que otros mandatarios de Latinoamérica y el Caribe no asistieran.

Países centroamericanos asistentes y no asistentes

Giammattei adujo compromisos previos.

Bukele no dio razones específicas

Rodrigo Chaves fue el único participante

Xiomara Castro no asistiría si no se invitaba a todos los gobiernos por igual

Estas ausencias revelaron las tensiones entre Estados Unidos y los países de la región a pesar que la vicepresidenta Kamala Harris anunció un fondo de 1900 millones de dólares para los países del norte de Centroamérica a fin de frenar los intensos flujos migratorios que se han desencadenado especialmente en el último año.

Temas centrales: migración, inseguridad alimentaria, la crisis climática, los asuntos económicos y de salud.